

Editorial

La encrucijada electoral en México 2018: entre la continuidad y la expectativa de cambio

HUMBERTO MÁRQUEZ COVARRUBIAS

La derechización de la política profesional y el consecuente desdibujamiento de la izquierda, aunado a la proliferación de populismos de distinto signo y textura, marcan el escenario mundial que diluye la diferenciación entre las izquierdas y derechas del espectro político, líneas de demarcación relativas y difusas, que han sido un referente para ubicar a las fuerzas políticas de acuerdo con su ideario, programa y vínculos sociales entre posturas reaccionarias, conservadoras, reformistas o revolucionarias.

En contraposición a la experimentación del giro progresista en la mayor parte de Sudamérica, en México por tres décadas y media han gobernado sin cortapisas los partidarios del neoliberalismo. Para bloquear el triunfo de la versión local del progresismo, un nacionalismo reformista muy contenido, han cometido sucesivos fraudes electorales, derrochado grandes cantidades de dinero público y privado, manipulado a las audiencias de los medios de comunicación y orquestado campañas de odio y miedo.

A nombre de la alternancia electoral, una simulación de transición a la democracia, los partidos de la derecha mexicana, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), se pasaron condescendentemente la estafeta y fingieron operar el cambio con la promesa incumplida de modificar el régimen para en lugar de ello mantener indeleble la sustancia de la dominación oligárquica y profundizar el programa neolibe-

ral con la aplicación de nuevas y más agresivas reformas que desmantelan derechos sociales y laborales, productos de conquistas sociales históricas.

En la víspera de los comicios, ambos partidos arriban desprestigiados, con graves acusaciones mutuas de corrupción e impunidad, además de ser corresponsables de la infausta gestión económica y social de un país sumergido en un régimen de acumulación signado por la superexplotación, la destrucción de la naturaleza, la especulación desbordada, la violencia generalizada y la transferencia de valor al exterior; incluso las cuentas macroeconómicas omnipresentes en el ideario neoliberal no cuadran: campea la recesión, se expanden la corrupción y la impunidad, aumentan la desigualdad, la pobreza y la precariedad, proliferan la violencia y el quebranto de la convivencia en el nivel societal.

Al relevar al PAN en 2012, que habría estado al frente en una docena trágica, el PRI restauró la hegemonía que ha ejercido por 77 años, con la breve interrupción de dos sexenios, pero retomó el control del aparato estatal federal con su clásica forma de hacer política: autoritaria, patrimonialista, clientelar y corrupta, además de rearticular la economía criminal, que incluye en su repertorio al narcotráfico y una multiplicidad de actividades de lavado de dinero cuyo alcance no puede medirse con claridad en ausencia de un poder judicial autónomo y

eficaz. El candidato priista José Antonio Meade es el mejor representante tecnócrata de la continuidad neoliberal bipartidista que cumple el papel de gestionar los intereses de los hombres de negocios del país y el extranjero, pero su condición burocrática no le concede carisma ni capacidad para conmovir a los sectores populares ávidos de promesas de ocasión, ni de generar confianza fuera de los círculos clientelares que el aparato estatal ha forjado largamente para garantizar el respaldo electoral.

Sin embargo, el partido de Estado cuenta con caudales de dineros públicos y privados que rompen los límites permisibles y disponen del respaldo de los órganos electorales, que no ejercen adecuadamente su papel de árbitros imparciales. Por ello, una vez más se cierne el riesgo de que se orqueste una campaña de Estado junto con una operación mediática, como la llamada guerra sucia, con la pretensión de que se empareje en la percepción pública con el candidato puntero en las encuestas para crear un margen de maniobra que permita presionar a los sectores indecisos con políticas de miedo, disuadir a los opositores con estrategias de terror electoral y operar viejas y nuevas estratagemas de fraude electoral, como sucedió en la elección de 1988 (la «caída del sistema»), 2006 (conteo fraudulento de votos, «haiga sido como haiga sido», Calderón *dixit*) y 2012 (el telepresidente y los monederos electrónicos de Monex-Soriana).

Después del *impasse* priista, con dos sexenios de mal gobierno, el PAN no está en condiciones de competir contra el PRI-gobierno, siendo además que sufrió una escisión y rivalizará contra la candidatura «independiente» de Margarita Zavala, en realidad una defección del propio partido que le restará una cantidad importante de votos entre su electorado tradicional. Para contrarrestar su debilidad de arranque, el partido formó una coalición con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), un partido que abandonó definitivamente sus

orígenes de izquierda merced a la unión entre nacionalistas revolucionarios y socialistas, que sería depurado de militancia e ideología por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y ahora se constriñe a ofrecer al mejor postor sus nichos clientelares en algunos lugares de la Ciudad de México, donde encabezó la gubernatura Miguel Mancera, quien dilapidó la avalancha de votos que lo ungieron como jefe de gobierno y terminó sin respaldo alguno para impulsar su candidatura, además de venderse en el mercado electoral como un factor que pudiera restarle votos a Morena. La alianza postuló entonces a un político joven, polémico, advenedizo y ambicioso, Ricardo Anaya, que es otra versión del proyecto de la derecha neoliberal de los poderosos sectores oligárquicos.

La tendencia entre las denominadas izquierdas en México, como en otras partes del mundo, es que pierdan la ideología y el compromiso social que les daba nombradía e identidad política y se entregan al pragmatismo, los acuerdos cupulares y las alianzas oportunistas en pos del triunfo electoral con sectores de la derecha hasta confundirse con ellos. El dictamen popular no es del todo errado: «Todos son iguales». De lo poco que aún queda de izquierda en el espectro partidario, Morena y su candidato, que acude por tercera ocasión consecutiva, Andrés Manuel López Obrador, encabezan de nueva cuenta las encuestas y se ubican en el centro del debate en unas campañas electorales insulsas.

Con procedimientos poco democráticos, en ausencia de un debate interno en Morena, con el cálculo electoral como premisa, López Obrador decidió que la estrategia ganadora era dar un viraje drástico hacia la derecha, con lo cual el programa moderado de ese partido se tornaba más aterciopelado y se difundía con un discurso conciliador y «amoroso» que ya había sido expresado en 2012, pero ahora es reforzado con la pretendida moralización de la política, la amnistía a los delincuentes, el perdón a los políticos corruptos, la alianza con los

evangelistas de derecha del Partido Encuentro Social (PES), la adopción de tráfugas políticos del PAN, PRI y PRD y su colocación automática en las candidaturas, además de la postulación de emisarios empresariales en el gabinete y la coordinación de la campaña, algunos de los cuales habrían estado incrustados en «la mafia del poder», el enemigo político que había obsesionado al candidato en las campañas precedentes.

Al correrse hacia la derecha, López Obrador se presenta con unas alianzas y un programa que lo tornan más conservador que el frente electoral perredista de 1989 y las incursiones lopezobradoristas de 2006 y 2012. Esta versión más descafeinada considera el cálculo de oportunidad electoral de López Obrador que parte del supuesto de que tiene cubierto y ganado el flanco izquierdo, en el que se guarece el voto duro de los sectores devotos del líder carismático y donde se sumaría el voto útil de la izquierda que incluye a sectores politizados y sectores juveniles que no comulgan con el proyecto nacional-popular y los retoques conservadores de Morena. En el conteo de votos, se asume que el fallido intento de registrar la candidatura indígena y anticapitalista de María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, vocera del Concejo Indígena de Gobierno del Congreso Nacional Indígena y respaldada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pudiera acumular sufragios al candidato que se presenta como «puntero» en las encuestas, pero al mismo tiempo es una muestra fehaciente de la imposibilidad práctica de conformar un polo de izquierdas con un programa digno de esa orientación política, que progresivamente pudiera ser antineoliberal y anticapitalista.

La encrucijada electoral permite varias interpretaciones. La primera es que reviste un carácter de referéndum del modelo económico-político llamado neoliberal donde subyace una disputa por el proyecto de nación entre la continuidad refrendada por el PRI y el PAN y

sus secuaces, que implica reforzar la vorágine de violencia estatal, capitalista y criminal, hasta llegar a una situación límite, atizada por la ofensiva del gobierno estadounidense de Donald Trump, y un proyecto alternativo de corte nacional popular de izquierdas, con tintes cada vez más derechistas, encabezado por Morena, que supone algún cambio en la conducción política y la reforma del modelo económico. La segunda es que la elección no se decide en las votaciones sino en los pactos cupulares, lo cual abre la posibilidad de que los poderes fácticos, para darle un respiro al modelo, podrían hacer una concesión para abrir un *impasse*, maquillar al capitalismo salvaje mediante la mínima compensación a los sectores populares, la contención a la voracidad rampante mediante una regulación estatal, la depuración de las tensiones sociales y la construcción de un nuevo consenso de unidad nacional. Sin embargo, las clases dominantes no confían del todo en López Obrador y no aceptan un giro estatalista, populista y redistributivo, entre ellos sigue prevaleciendo un profundo prejuicio de clase que les repulsa el estilo caudillista, popular y carismático del sempiterno candidato, y más aún sobre la masa social, plebeya, que lo apoya incondicionalmente, motejada como ignorante y populachera (por ejemplo, a los activistas se les identifica despectivamente como *chaitros*). La intentona de congraciarse con el mundo empresarial, un gesto que ya había realizado mediante la apertura de jugosos planes de negocio durante su mandato como jefe del Distrito Federal entre 2000 y 2005, es rechazada por sectores oligárquicos que han vivido al amparo del Estado y su égida neoliberal.

El énfasis de las campañas, el punto central de los discursos, en buena medida sugerido por López Obrador pero también por los organismos privados como Mexicanos Primero y adláteres, ha sido la cuestión de la corrupción, incluso se argumenta que no es necesario hacer mayores cambios, pues con un régimen

basado en la honestidad y la moralidad, sin subir impuestos ni incurrir en más deuda, se recuperarán recursos suficientes para emprender políticas redistributivas. Este enfoque es muy limitado, puesto que la corrupción es sólo un síntoma, no la causa del problema, y en consecuencia no se discute seriamente y a profundidad el modelo económico-político y por tanto no se hacen propuestas consistentes para cambiarlo, sólo se plantean medidas paliativas para sectores marginados, como jóvenes y adultos mayores. El combate a la corrupción genera determinadas expectativas en la sociedad civil pero amenaza a poderosos grupos políticos y empresariales que hacen de la corrupción el *modus operandi* del sistema político-económico y de sus puertas giratorias, por lo que no estarían dispuestos a aceptar el triunfo electoral o pactar previamente su asunción.

Como se ha constatado en América Latina, bajo el influjo del imperialismo estadounidense, la derecha internacional está empecinada en descarrilar el giro progresista, sea con golpes de Estado legislativos, fraudes electorales o persecución de expresidentes. En México resurge la furibunda reacción derechista, que desde organismos patronales, medios de comunicación e intelectuales orgánicos, pretende influir en el voto popular mediante la implementación de campañas de odio y miedo, la propagación de noticias falsas, la manipulación de la opinión pública y la compra y coacción del voto. La operación de otro fraude electoral y el desconocimiento de una hipotética victoria de Morena están patentes. El vuelco derechista del proceso electoral repercute en la estrategia del candidato de izquierdas quien está pactando con sectores de la oligarquía, la denominada «mafia del poder», y planteando perdones, amnistías y concesiones para contrarrestar la animadversión de las élites, en desdoro de un programa de «cambio verdadero», en el que hasta hace poco se decía «por el bien de todos, primero los pobres».

Con el antecedente de la rupestre simulación de 2000, la tentativa del tránsito a la democracia, así sea en el plano puramente electoral, que permita el ascenso del proyecto nacional popular de la vertiente opositora que desde 1988 ha contendido por la presidencia, con Cuauhtémoc Cárdenas en una ocasión y con Andrés Manuel López Obrador en tres, la última de las cuales presenta una versión menos democrática y más conservadora, requerirá mucho más que una ejemplar jornada cívica de voto masivo popular en el marco de una administración electoral transparente y equitativa. La eventual transición pacífica e incluyente es poco probable con sólo un discurso alambicado con alusiones a la amnistía a los narcotraficantes y el perdón a los políticos y empresarios corruptos, los criminales de cuello blanco.

A sabiendas de que amplias regiones del país están bajo el yugo de grupos criminales, capitales depredadores y estructuras de poder priistas-panistas que a menudo forman un triunvirato, el despliegue de las campañas electorales presenta una gran disparidad de recursos financieros, legales e ilegales, para la compra masiva del voto, la manipulación de votos, urnas y conteos donde no haya suficiente vigilancia o persista la colusión entre autoridades locales e intereses partidarios de derecha, además de los devaneos del conteo electrónico por las instancias encargadas.

Cualquiera que sea el desenlace del proceso electoral no se avizora en el horizonte cercano un proyecto de cambio profundo del patrón de acumulación y el régimen político. Las ofertas electorales representan distintas versiones de un consenso político de las élites que pretende mantener a buen resguardo los fundamentos y la sustancia del capitalismo neoliberal a la mexicana. Los emisarios de las derechas de viejo cuño presentados como burócratas tecnocráticos que saben operar la macroeconomía o como políticos jóvenes que pergeñan diatribas audaces refrendan al unísono una ideología de

corte neoconservadora y un programa neoliberal con intencionalidades más agresivas y antipopulares. El representante del nacionalismo popular con tintes progresistas se apresta a formar gobierno anticipadamente con sectores de ultraderecha y derecha tradicional, es decir, fracciones de la burguesía nacional, y en su programa sólo contempla pequeñas concesiones a los sectores populares sin tocar los cimientos del capitalismo neoliberal. A lo sumo, la noción de cambio se ajusta a reformas cosméticas del sistema de poder que ampara los mecanismos de explotación, despojo, opresión y violencia.

La barrera de contención al pragmatismo, la derechización y los pactos oligárquicos es la organización, participación y lucha de los sectores populares, no sólo para participar como votantes comedidos en comicios organizados por instituciones desacreditadas, sino para impulsar en cualquier plano y nivel un cambio necesario, profundo y duradero. Pues el eventual triunfo de Morena no asegura una ruptura con el modelo prevaleciente ni la reorientación hacia un gobierno democrático, la justicia social y la soberanía. Más que la pulcritud electoral, un escenario improbable, se requiere que el conjunto de la sociedad trastoque la correlación de fuerzas, las dinámicas del poder y las relaciones de dominación, problemas que trascienden la rutinaria lógica de las campañas y las anodinas propuestas de los contendientes.

En definitiva, el cambio anhelado por la mayoría de la población no provendrá desde arriba, del sistema de poder, como concesión graciosa de la oligarquía y su partidocracia. Sólo la organización popular, «desde abajo», hará posible el cambio verdadero, a partir de

la articulación de las múltiples disidencias, movimientos sociales y sindicatos, la unión de los trabajadores, la confluencia de los desposeídos, la congregación de los afectados, la unidad de los estudiantes, y eventualmente permitirá la emergencia de un poder popular que intervenga en las grandes tomas de decisiones más allá de los procesos electorales, fiscalice la organización y el funcionamiento del Estado y construya ámbitos de autonomía y libertad. En la trama histórica del México contemporáneo aún subyacen las enseñanzas, las derrotas y los triunfos de las luchas democráticas, como la del movimiento estudiantil de 1968, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, los movimientos cívicos en contra de los fraudes electorales de 1988, 2006 y 2012, incluyendo el YoSoy132 y la búsqueda de los 43 de Ayotzinapa, entre otros. Si bien muchos de estos movimientos pudieron ser derrotados o contenidos en sus propósitos inmediatos, no cabe duda de que lograron cimbrar la conciencia ciudadana y politizar a grandes sectores de la sociedad que permanecían en la pasividad o la indiferencia, además, de manera conjunta fueron acumulando fuerzas y animando la organización de otros movimientos. La resistencia, la organización y el activismo del movimiento popular han cuarteado al vetusto y corrompido sistema de poder y han desafiado el autoritarismo que simula cambiar, para que todo siga igual y poder extender su dominio. De nueva cuenta, el desafío está planteado, cambiar para que todo siga igual o cambiar de raíz el sistema de poder. 🐦